

¿América Latina ante una nueva encrucijada?

Carlos Ruiz¹ y Giorgio Boccardo²

Abstract:

In 2014, Latin America re-enters a period of political and social uncertainty that has climbed at an accelerated pace. In order to study this phenomenon, it is necessary an understanding of the current historical process out of the tensions that produce the variants of integration still dependent on each of the national context as part of the global capitalist scene. Rather than representing a mechanical homogenization, the local mutations relate to the physiognomy adopted by the hegemonic alliances and by the conflict between different social forces in order to shape state action. From this perspective, it is acknowledged a rising political crisis and the extreme difficulty of governments to contain social movements. For now, there are not clear hints on the solution of the ongoing political crisis. However, the citizenry does not still lean for alternative political options.

Keywords: neoliberalism, Latin America, political conflict, social forces

Resumen

En 2014, América Latina vuelve a entrar en un período de incertidumbre política y social que ha escalado en forma acelerada. Para darle seguimiento a su curso es necesario recuperar una comprensión del proceso histórico inmediato a partir de las tensiones que producen las variantes de inserción, todavía dependientes en la escena capitalista mundial, de cada una de las situaciones nacionales. Lejos de representar ello una homogeneización mecánica, las mutaciones que comportan se relacionan con la fisonomía que adoptan las alianzas dominantes y el conflicto entre las distintas fuerzas sociales por la orientación de la acción estatal. Bajo esa perspectiva, se

¹ Sociólogo y Doctor en Estudios Latinoamericanos. Director del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Presidente de la Fundación Nodo XXI. cruizencina@uchile.cl

² Sociólogo. Académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Director de la Fundación Nodo XXI. giorgio222@gmail.com,

constata una situación de crisis política en ascenso y la extrema dificultad de los gobiernos para contener la protesta social. De momento, no aparecen indicios claros de que la crisis política abierta se resuelva, sin embargo, todavía la ciudadanía no se inclina por alternativas políticas a las que actualmente gobiernan.

Palabras clave: neoliberalismo, América Latina, conflicto político, fuerzas sociales

Resum

En 2014, Amèrica Llatina torna a entrar en un període d'incertesa política i social que ha escalat en forma accelerada. Per donar-li seguiment al seu curs és necessari recuperar una comprensió del procés històric immediat a partir de les tensions que produeixen les variants d'inserció, encara depenents en l'escena capitalista mundial, de cadascuna de les situacions nacionals. Lluny de representar això una homogeneïtzació mecànica, les mutacions que comporten es relacionen amb la fisonomia que adopten les aliances dominants i el conflicte entre les diferents forces socials per l'orientació de l'acció estatal. Sota aquesta perspectiva, es constata una situació de crisi política en ascens i l'extrema dificultat dels governs per contenir la protesta social. De moment, no apareixen indicis clars que la crisi política oberta es resolgui, no obstant això, encara la ciutadania no s'inclina per alternatives polítiques a les quals actualment governen.

Paraules clau: neoliberalisme, Amèrica Llatina, conflicte polític, forces socials

El último tiempo, especialmente el año 2014 y lo que va de este, ha estado marcado por el desplome de muchas de las certezas que animaban, hasta hace poco, las expectativas políticas, sociales y económicas en América Latina. La conflictividad política y social reciente ha escalado en forma acelerada, desde sus planos más comunes, de una latencia casi acostumbrada, hasta situaciones abiertamente críticas, llegando a plantear una incertidumbre sobre

el futuro inmediato de muchos países de la región. De tal modo, las proyecciones del continente entran en revisión una vez más, como una constante histórica, pero en la que cada ciclo agrega su especificidad. Esta vez, una disyuntiva que apunta al destino de las diferentes modalidades que adopta la experiencia neoliberal en la región, a las variantes políticas que intentan su conducción y ajuste, a las alianzas sociales que las sostienen y a la legitimidad que todo ello alcanza.

En la década del noventa, prácticamente todos los gobiernos latinoamericanos impulsaron programas de reformas neoliberales para modificar, en forma drástica, las orientaciones vigentes sobre el patrón de acumulación sostenido hasta ese entonces³. No obstante, son fuerzas políticas a la tradición neoliberal⁴ las que, en un inicio, avanzan en procesos de apertura comercial y en la firma de tratados de libre comercio con países desarrollados; que impulsan planes de liberalización financiera, monetaria y comercial de sus economías; que promueven políticas de privatización productiva; que flexibilizan el mercado del trabajo y los sistemas de seguridad social; así como también, que recortan significativamente los programas de redistribución y la cobertura de los servicios sociales públicos.

Si bien en una primera etapa estas políticas tuvieron un éxito importante en el control de la inflación y la devaluación de la moneda local, a poco andar, el escenario económico internacional y los propios conflictos irresueltos entre diversas fuerzas sociales que provienen del periodo nacional-popular y resultan aún vigentes, dificultan seriamente la implementación de una nueva generación de reformas en esa dirección. La repentina fuga de capitales especulativos producto del “efecto tequila” (1994-1995), las consecuencias que generó la crisis del sudeste asiático (1997-1998) y la declaración de la moratoria rusa (1998) que estremeció los mercados internacionales, obligaron a varios

³ Una excepción al respecto la constituye el caso chileno, que inicia las reformas neoliberales mucho antes, en la segunda mitad de la década del setenta, en plena dictadura militar. La experiencia de los años noventa, en este caso, es más bien de profundización de orientaciones heredadas (Ruiz y Boccardo, 2014).

⁴ Es en ese periodo, por ejemplo, cuando el PRI de Carlos Salinas de Gortari en México, el peronismo encabezado por Carlos Menem en Argentina y la Acción Democrática del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, ejecutan políticas económicas apegadas a una irrestricta ortodoxia monetarista.

gobiernos de la región a cambiar el paso, y hasta la orientación, de muchas de estas reformas, con el propósito de profundizar el giro neoliberal o bien retrotraer las políticas monetaristas adoptadas.

Con el despunte del nuevo milenio, se proyectan en varios países de América Latina gobiernos sindicados como progresistas. En general, beneficiados por la creciente demanda internacional por materias primas y manufacturas regionales de escaso valor agregado, estos gobiernos expandieron las políticas sociales a una mayor proporción de la población, con lo que disminuyeron significativamente la pobreza y la marginalidad extrema que se habían agudizado bajo los ajustes anteriores. A su vez, la reactivación económica produjo un aumento real de los salarios y una sostenida disminución del desempleo abierto, a la vez que cierto retroceso de la informalidad. Sin embargo, en los años recientes el crecimiento latinoamericano ha mostrado algunos signos de agotamiento⁵, en tanto que varios gobiernos comienzan a presentar dificultades para continuar de forma hegemónica con las denominadas “revoluciones pasivas” (Modonesi, 2013).

Sobre el giro neoliberal latinoamericano y sus variantes se han ensayado distintas interpretaciones. Algunas han señalado que a fines de los años noventa se produce un fracaso del ideario neoliberal ortodoxo y arranca, paulatinamente, una etapa “posliberal” encabezada por gobiernos de centro izquierda, que reorienta el patrón de desarrollo a partir de una decidida acción del Estado (Burki y Perry, 1998a; 1998b). Otras interpretaciones apuntan a distinguir situaciones nacionales, diferenciando para ello aquellos países que sostienen una política económica neoliberal inalterada, respecto de otros gobiernos que han transitado a variantes “neodesarrollistas” (Aranibar y Rodríguez, 2013).

Asimismo, existen posiciones críticas respecto de estos enfoques posliberales y neodesarrollistas, las cuales sostienen que las transformaciones deben ser entendidas como un perfeccionamiento y una profundización del programa neoliberal, y no como su retroceso (Stolowicz, 2009). Finalmente, se ha

⁵ Según estimaciones de la Cepal (2014), el crecimiento del producto interno bruto para América Latina y el Caribe fue de sólo un 1,1% en 2014, mientras que el 2010 fue de un 6,1%. En adelante, todas las estadísticas presentadas provienen de la misma fuente.

formulado una interpretación que destaca el hecho de que en todos los países de América Latina existen ciertos grados de avance del neoliberalismo, y que éste se entiende en relación a la fisonomía que adoptan las alianzas dominantes y el conflicto entre las distintas fuerzas sociales por la orientación de la acción estatal (Ruiz, 2013).

En base a este último enfoque, se advierten tres variantes de dicha transformación⁶. La primera, en que el avance del neoliberalismo ortodoxo tiende a adoptar un desarrollo ininterrumpido, y con eso alcanza mayores grados de profundidad y madurez, al punto de mercantilizar prácticamente todos los ámbitos de la vida social. Una situación en la que Chile resulta el caso más representativo, pero que también le siguen en esa senda países como Colombia, México y Perú, y, en una etapa más temprana de reformas, Paraguay. La segunda, en cambio, propia de un “neoliberalismo revertido” en distintos grados, retrotrae la transformación heredada a modalidades próximas a las orientaciones nacional-populares, en donde diversas fuerzas sociales se rearticulan clientelaramente en torno al Estado, como ocurre en Argentina, pero también en Venezuela y Bolivia. La tercera variante descansa en un pacto, apuntado como “liberal desarrollista”, y combina reformas típicamente neoliberales con formas de protección que incorporan a fuerzas sociales de cursos de crecimiento más propios de la historia inmediata, como la “industrialización tardía” de la experiencia brasileña, y en menor grado en Uruguay y Ecuador.

Es desde este último marco de interpretación que se analizan los rasgos principales que adopta el conflicto social y político en América Latina en 2014.

Los neoliberalismos ortodoxos

En las experiencias de neoliberalismo ortodoxo la transformación es impulsada por una poderosa alianza integrada por grandes grupos empresariales locales, las tecnocracias y el capital multinacional. En su conjunto, orientan la acción

⁶ Más detalles respecto a esta tipología pueden ser revisados en Ruiz (2013). Para los casos de “neoliberalismo ortodoxo” pueden revisarse también Boccardo (2014) y Ruiz y Boccardo (2014).

estatal hacia modalidades subsidiarias y políticas económicas de tipo monetarista. Los basamentos de la sociedad nacional-popular, a saber, fracciones del empresariado nacional, las burocracias públicas y los obreros industriales, son crecientemente desarticuladas, pero también el Estado de Compromiso y la política económica desarrollista. Todo lo anterior ocurre en un contexto de autoritarismo político exacerbado –en el caso chileno las primeras reformas se impulsan en dictadura- producto de la ejecución de doctrinas de “seguridad nacional” que permiten a los gobiernos enfrentarse a las guerrillas rurales y urbanas, o al narcotráfico, así como también impedir la proyección de alternativas políticas al neoliberalismo.

El giro neoliberal en Chile adquiere un carácter pionero y original, no sólo por lo precoz y radical de su inicio, sino también por algunos alcances que, en su desarrollo ininterrumpido, modifican las condiciones de reproducción de vastos sectores de la sociedad en una hondura sin parangón. Al punto que arroja, en su transcurso de más de cuatro décadas, un panorama sociocultural nuevo, donde es difícil advertir muchas de las huellas de la vieja sociedad chilena propia de los tiempos del desarrollismo. Sin embargo, desde el 2006, y con más fuerza el 2011, comienza a madurar un malestar social que, si bien inicia por la crisis de la educación pública y es liderado por el movimiento estudiantil, involucra crecientemente a disímiles sectores sociales. El regreso de la Concertación al gobierno y de Michelle Bachelet a la presidencia en 2014, estuvo marcado por la promesa del inicio de un nuevo ciclo político, ajeno a los consensos de la transición y proclive a la implementación de grandes reformas que vendrían a enfrentar las desigualdades presentes en el país. La propuesta indicaba que tales demandas deberían traducirse en políticas, especialmente enfocadas en realizar cambios a la estructura tributaria, a la Constitución vigente y, especialmente, al sistema educativo. Sin embargo, el peso que ostenta el empresariado sobre la política institucional y la orientación subsidiaria del Estado, además de la nula voluntad política de la Concertación, impiden llevar adelante reformas sustantivas al neoliberalismo. Esta situación, sumado a los recientes escándalos de financiamiento empresarial a la política,

ha generado una situación inédita de vacío político y han reactivado la protesta social.

En Colombia, tras veinticinco años de transformaciones neoliberales lideradas por el Partido Liberal, las expectativas de una fracción mayoritaria de los grupos económicos locales y multinacionales, pero también de la ciudadanía, están puestas en la resolución política del conflicto armado entre el Estado y las FARC. En 2014, las tratativas encabezadas por el presidente Juan Manuel Santos fueron respaldadas electoralmente. En efecto, en la segunda vuelta electoral, Santos se impuso al candidato del uribismo, Óscar Zuluaga, que prometía volver al enfrentamiento armado y a considerar la guerrilla como grupo terrorista. En adelante, los “Diálogos de Paz” entre los equipos negociadores de Santos y las FARC, apostados en la Habana, intentan resolver la reintegración de la guerrilla a la política nacional y la reparación a las víctimas del conflicto, pero también la erradicación de las plantaciones ilegales de droga y una solución para los campesinos que habitan en las tierras que aún controlan las guerrillas. Ahora bien, la cuestión de la redistribución de la tierra choca directamente con los intereses de la gran minería y de la agroindustria, que excluyen crecientemente a campesinos e indígenas. Este problema ha reactivado también la protesta y paralización productiva de un conjunto de organizaciones rurales articuladas en la Cumbre Agraria, en tanto que el gobierno de Santos ha respondido con represión policial e incumplimiento de los acuerdos (Osorio, Franco, Pérez y Nieto, 2014). De momento, todo indica que los basamentos del neoliberalismo parecen completamente consensuados entre los grupos empresariales nacionales, el capital multinacional y toda la nueva intelectualidad tecnocrática que apuestan a expandirse sobre el territorio que resulte “liberado” de las negociaciones con las FARC.

En Perú, el neoliberalismo se instala durante la década del noventa bajo el gobierno de Fujimori y los gobiernos que le sucedieron han profundizado su carácter. El presidente Humala (2011-2016), pese a su programa afincado en elementos propios de una izquierda nacionalista, para asegurar el triunfo sobre el fujimorismo, negocia con fracciones del empresariado nacional, así como

también se compromete con las tecnocracias monetaristas y los organismos financieros internacionales a darle continuidad al programa neoliberal. No obstante lo anterior, en el 2014 el crecimiento se ha ralentizado (de 5,8% a 2,8% en 2013-2014), han estallado una serie de escándalos de corrupción que tienen paralizado al Ejecutivo y se ha reactivado el conflicto social en distintas regiones del país. En relación a los escándalos de corrupción, una alianza entre las fuerzas del APRA y del fujimorismo busca evitar que se profundicen las investigaciones de corrupción de gestiones anteriores y ha bloqueado la iniciativa del Ejecutivo. Respecto a los conflictos socioambientales, el desenvolvimiento de megaproyectos en minería e hidrocarburos de multinacionales en distintas regiones del país han confrontado a las comunidades y gobiernos locales con Humala y las multinacionales. Asimismo, a fines del 2014 diversas organizaciones de jóvenes se movilizaron contra la Ley de Régimen Laboral Juvenil que precariza significativamente las condiciones de este segmento, lo que obligó al Congreso a derogarla a comienzos de este año. No obstante, el fraccionamiento político dificulta la constitución de alternativas al neoliberalismo, en tanto la alianza dominante comienza a ver entre las fuerzas políticas existentes (aprismo, nacionalismo o fujimorismo) cual es la mejor alternativa para retomar el tranco de las reformas ortodoxas y sostener la inversión extranjera, para que Perú recupere el ritmo de crecimiento observado en los últimos años.

En México, el retorno del PRI al poder con Peña Nieto (2012-2018) no ha significado un cambio sustantivo en el estilo de desarrollo neoliberal adoptado por Carlos Salinas a comienzos de los noventa, ni tampoco una disminución de la violencia ni del poder de los narcotraficantes que se desató con los gobiernos de Acción Nacional (PAN) durante la primera década del siglo XXI. En el 2014, su gobierno termina de aprobar una serie de reforma de orientación neoliberal, siendo la energética la más emblemática porque permite la inversión de capitales privados en Pemex y acaba con el principal símbolo de la Revolución mexicana. Sin embargo, la sangrienta matanza de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, que protestaban contra el autoritarismo del alcalde de Iguala, más allá de visibilizar problemas históricos de la sociedad

mexicana -como son la violencia y la corrupción-, ponen en duda la capacidad del PRI de reorganizar una sociedad en que las fuerzas “nacional revolucionarias” han perdido todo poder. No obstante aquello, el peso que detentaron durante setenta años todavía les permite proyectar ciertos alegatos aislados –sobre todo desde los sindicatos de maestros-, pero que no constituyen una amenaza sustantiva para el orden neoliberal. Ahora bien, no queda del todo claro que el nuevo gobierno priista se logre legitimar ante una sociedad deshecha por la violencia, el poder del narcotráfico, un débil crecimiento y la pauperización creciente de sus condiciones de vida. En definitiva, aún queda por dilucidar cómo se resolverá el problema del control social, ahora que el PRI ya no puede recurrir a las corporaciones nacionales que el mismo se encargó de desarticular.

En suma, el retorno de la Concertación en Chile, de las fracciones más democráticas de los liberales en Colombia, del PRI en México o de los nacionalistas en el Perú no ha significado un cambio sustantivo en la orientación neoliberal ortodoxa de estos países. En tanto, en el Paraguay, todavía en una etapa muy embrionaria, comienza a consolidarse bajo la presidencia de Horacio Cartes un programa de reformas neoliberales como las observadas a comienzos de los noventa en las otras experiencias reseñadas. A lo sumo, los nuevos gobiernos han expandido los alcances de las políticas redistributivas focalizadas –siempre que el crecimiento lo permita-, o bien promueven la adopción de medidas de protección socioambientales que “reparan” el grave daño generado por la consolidada matriz extractivista a las comunidades locales. Sin embargo, no está en el horizonte de estos partidos retornar a los viejos mecanismos de procesamiento institucional del conflicto social, propios del Estado de Compromiso, ni tampoco a las formas de participación típicas de la democracia nacional-popular. No obstante aquello, la maduración de un nuevo malestar observado en el caso chileno no permiten augurar que en este tipo de sociedades la desarticulación social sea una constante en el tiempo.

Los “neoliberalismo revertidos”

En las experiencias de neoliberalismo revertido, el giro ortodoxo comienza a fines de los ochenta, si no directamente en los primeros noventa. Sin embargo, la incapacidad de las fuerzas que empujan las reformas para asentarse en alianzas sociales capaces de reducir las resistencias que despierta la transformación, implica una reversión a manos de fuerzas nacional-populares que coinciden tras la defensa de las prerrogativas amenazadas, más que una articulación programática en torno a algún patrón de desarrollo alternativo. Ahora bien, esta dificultad de constituir un orden deviene en el colapso del sistema político, o al menos de los gobiernos, asociados al impulso de la reforma neoliberal. Ello abre situaciones de vacío político en las que emergen empeños de freno, e incluso reversión, de muchas de las transformaciones consideradas bajo tal ideario neoliberal.

En Argentina, con la llegada de Kirchner en 2003 se recuperan viejas funciones estatales, como la regulación de precios y la transferencia de ingresos hacia sectores medios y trabajadores, la protección del mercado interno y el papel de árbitro en la relación entre capital y trabajo, debilitando el patrón de Estado subsidiario impuesto por Menem en los años noventa. Pese a que se mantiene la prioridad en los equilibrios macroeconómicos y el control presupuestario, se busca estimular la producción local y debilitar el predominio del sector financiero en la economía, empleando alzas salariales y subvenciones para recuperar la demanda interna. En los últimos años, el declive de los precios de los *commodities* y la crisis económica brasileña –de la que depende la industria metalmeccánica argentina–, estrechan la capacidad del Estado para redistribuir los excedentes que provienen de las exportaciones y sostener los compromisos financieros con la banca internacional. En ese marco, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández, y con particular fuerza en 2014, se reabre la “puja distributiva” entre exportadores agroindustriales y productores volcados al mercado interno, pero también se reactiva la protesta social de franjas medias y obreras por la elevada inflación que no es paliada suficientemente por los subvenciones o las alzas de salarios. Asimismo, en algunas provincias como la

Rioja y San Juan estallan conflictos entre la mega minería y las comunidades locales (Bottaro y Sola, 2014). Esta situación se ha agravado producto de una nueva crisis de la deuda que obliga al país a depositar importantes sumas a los acreedores internacionales. En ese marco, el kirchnerismo ha buscado alianzas internacionales con China, Rusia e Irán que le permitan disponer de capital de inversión para proyectar un capitalismo de orientación nacional. En todo caso, son conflictos que se canalizan políticamente dentro de los anchos márgenes del peronismo, que comienzan a proyectarse en candidaturas para las presidenciales de finales del 2015.

En Venezuela, tras un largo período de estabilidad política, el impulso de la transformación neoliberal bajo el segundo gobierno de Pérez en los noventa arrastra, rápidamente, a un colapso del sistema político que se mantenía desde el Acuerdo de Punto Fijo. Tales condiciones de vacío político, explican en parte el vertiginoso ascenso de un liderazgo militar como el de Hugo Chávez en 1998. Las medidas neoliberales se revierten, de la mano de un distributivismo estatal que amarra nuevas clientelas al Estado que sostienen un proyecto antiimperialista y nacionalista que, no por ello, deja de ser capitalista; pero que no resuelve los términos de una nueva hegemonía social, manteniendo latente la oposición no sólo de las viejas clases medias desarrollistas, sino también del movimiento obrero que madura al alero del régimen “puntofijista”. De este modo, Chávez gobierna con la constante oposición de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y los segmentos estudiantiles y académicos del principal centro universitario público del país, la Universidad Central. Tras su muerte en 2013, asciende con dificultades Nicolás Maduro, quien debe enfrentar los resquemores de algunas fracciones del ejército, las protestas callejeras de la oposición –la misma que enfrentó a Chávez–, la inflación galopante y un desabastecimiento generalizado. La drástica disminución de las rentas del petróleo en 2014 dificultan al gobierno sostener los exitosos programas de redistribución social y los rasgos autoritarios del régimen político se han exacerbado para contener a una oposición que busca desestabilizarlo por la fuerza. No obstante, lo que está en juego, más que la democratización de Venezuela –cuestión que podría ser imputable a la mayoría de los países

latinoamericanos–, es la posibilidad de que en América Latina se desenvuelva un capitalismo nacional dentro de los marcos de una economía internacional de sello neoliberal.

En Bolivia la temprana transformación neoliberal, iniciada en los años ochenta, se acentúa efectivamente bajo el gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada. Pero este último –de magros anclajes dados los extremos grados de imposición externa a que responde– no es capaz de contener una resistencia popular que crece ante dicha transformación. A diferencia de la experiencia venezolana, el proceso boliviano es sostenido por movimientos cooperativos, pequeños y medianos propietarios, comunidades y, en general, unidades sociales intermedias, que no corresponden a una condición de masa inorgánica como ocurre en Venezuela. Ahora bien, su proyección política se torna desbordante cuando alcanza a cristalizar una alianza en el Movimiento al Socialismo (MAS) con los sectores medios urbanos y, de allí, se hace gobierno tras la figura de Evo Morales en 2005. Bajo su primer mandato se impulsa tanto un freno como un empeño de reversión de muchas de las transformaciones neoliberales que antes lograron avanzar. En 2014, Morales es elegido por tercera vez como presidente con un contundente apoyo (del 60%) y el MAS se impone en ocho de los nueve departamentos del país. Ahora bien, la hegemonía “masista” se explica, en buena medida, por el colapso del sistema de partidos y el auge económico –tras la nacionalización de los hidrocarburos– que le ha proporcionado al gobierno de Morales ingresos suficientes para desplegar una ambiciosa política social que, en todo caso, apunta a favorecer focalizadamente a la población. Por otro lado, el crecimiento boliviano (de 5,2% en 2014) se explica por el acercamiento del propio Morales a los grupos empresariales locales y extranjeros a los que les ha garantizado la inversión siempre que esta permanezca en Bolivia. En suma, más que avanzar hacia la construcción del socialismo, el “evismo” apuesta a consolidar un capitalismo de corte nacional-popular.

En definitiva, lo que está en juego en estos países es la proyección o debilitamiento de un proyecto de desarrollo capitalista nacional sustentado en fuerzas sociales –más o menos organizadas– que se consolidan mediante el

distributivismo clientelar del Estado. No obstante aquello, el declive de las rentas petroleras y, en general, de los precios de las materias primas en los mercados internacionales, han debilitado la capacidad del propio Estado – sobre todo de Argentina u Venezuela– para sostener la alianza de dominio hegemónica.

Los “liberalismos desarrollistas”

El denominado “liberal desarrollismo” considera situaciones nacionales en que se impulsan reformas de corte neoliberal en que la presión externa se contrapone con poderosos intereses locales, los cuales le imprimen una orientación distinta a la versión “ortodoxa”, a partir de elementos asociables a la experiencia desarrollista. De este modo, todavía en plena transformación neoliberal, tanto el Estado como el modelo económico configurado de su mano, expresan condiciones sociales protegidas y privilegiadas por la tutela estatal. En otras palabras, los propios cambios en el Estado y la economía se direccionan bajo la acción de esas fuerzas, que conciben la proyección de sus condiciones de reproducción social desde la acción estatal. Su primacía sobre esta última alcanza al punto, incluso, de regatear en la configuración del modelo económico con esas presiones externas tan típicas del ciclo neoliberal, para garantizar la proyección propia.

Desde 1994 en adelante, Brasil inicia una senda de desarrollo e integración a los mercados internacionales en base a reformas típicamente neoliberales con protecciones para clases y fracciones sociales que irrumpen durante el periodo industrial autoritario. En base a ese consenso se logró sortear la aguda crisis de 1997-1998, y proyectar a Brasil como potencia emergente. Una modalidad cuya reformulación de las bases estatales se proyectan en lo esencial bajo los siguientes gobiernos del “socialismo petista”. Durante los dos mandatos de Lula da Silva (2002-2010), la bonanza económica permite al gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) empujar programas sociales que benefician a extensas franjas de la sociedad que acceden por primera vez a estilos de vida próximos a los de clase media. No obstante, el nulo crecimiento de los últimos tres años

(1,0%, 2,5% y 0,2% del crecimiento del PIB, respectivamente) y la exacerbada corrupción –problema histórico de la política brasileña– terminan por convertirse en un obstáculo para la reproducción del clientelismo estatal, pero más grave aún, dificultan al PT su realización como proyecto histórico. En el 2014, la denominada “nueva clase media” que asciende en la última década comienza a verse afectada por el elevado costo de la vida, en tanto se estrechan los beneficios a los que acceden la poderosa burocracia estatal y los sindicatos obreros. Ambas cuestiones se expresan en las masivas protestas sociales que ocurren previo a la realización del Mundial de Fútbol y en la seguidilla de huelgas obreras que se extienden por todo el país (Badaró, 2014). A partir de esa doble situación de crisis, estalla un malestar generalizado de la sociedad contra el gobierno de Dilma Rousseff y el PT, que tienen serias dificultades para reelegirse en las elecciones de octubre. Tornándose esta crisis política en la peor que atraviesa el país desde la caída de Fernando Collor de Mello en 1992.

En Uruguay, el ascenso del Frente Amplio al gobierno viene antecedido de un historial de luchas que permite que, a fines de los años noventa, las reformas neoliberales se ajusten a ciertos intereses de fuerzas locales. No obstante, la capacidad de contención y reformulación de la égida neoliberal no parece correr a manos de una burguesía local en alianza con nuevos grupos obreros – como ocurre en Brasil–, sino más bien de unas extendidas capas medias que se relacionan a un alto grado de desarrollo de la sociedad civil de larga data. Durante el gobierno de José Mujica se avanzó en la reducción de la pobreza, la elevación de los salarios, pero también se abrió el país –pese a la resistencia discursiva del presidente al neoliberalismo– a los capitales multinacionales, sobre todo para el desenvolvimiento de la industria alimentaria orientada a la exportación. Ahora bien, las estrecheces de Argentina y Brasil, de los cuales Uruguay ha sido históricamente dependiente, han desacelerado la economía (3,5% de crecimiento) y disparado la inflación (en torno al 8%) en 2014. Lo anterior ha significado que la alianza dominante vuelva a promover políticas en favor del crecimiento, así como también que una mejor gestión económica fuese el eje central de la campaña que llevó a su segunda presidencia a

Tabaré Vázquez (electo el 2014). Todo indica que, bajo su conducción, Uruguay continuará la senda de la liberalización económica y que se postergará buena parte del programa de reformas sociales que articulan políticamente a la izquierda del Frente Amplio.

En cambio, a la experiencia ecuatoriana le anteceden violentas crisis políticas, fundadas en la resistencia social de movimientos como Pachakutik, que encaran la impronta neoliberal encabezada por grupos económicos con asiento en la costa guayaquileña. Ahora bien, el avance neoliberal bajo los gobiernos ligados a dichos grupos que lleva al colapso del sistema político, bajo una resistencia de movimientos indígenas y sectores medios quiteños, no desemboca en fórmulas “neopopulistas” sino más bien dejan paso a una búsqueda más moderada de equilibrios bajo los gobiernos de Rafael Correa. Durante su segundo mandato (2013-2017), se ha impulsado un intenso programa de obras públicas y de fortalecimiento de servicios estatales, pero también se han buscado alianzas con capitales multinacionales para la explotación de recursos naturales. Esto último ha generado una fuerte protesta social de organizaciones socioambientales, comunidades locales, campesinos y movimientos indígenas. Al polémico cierre de la Iniciativa Yasuní ITT en 2013⁷, se agregan una serie de conflictos durante el 2014 por la instalación de proyectos de mega minería en distintas regiones del país. De momento las comunidades locales, apelando a la “revolución ciudadana” de Correa, han rechazado por la vía del referéndum a los capitales multinacionales; no obstante, el gobierno central requiere de esos recursos para sostener sus programas y, cada vez más, comienza a apelar a fórmulas autoritarias de control y desarticulación de la oposición social y política a su gestión.

En suma, la mayor liberalización económica y las dificultades de sostener los ritmos del crecimiento nacional de estos países han reabierto el conflicto social en el último año, o bien han ralentizado las reformas orientadas a expandir derechos sociales a las fuerzas sociales integradas en la alianza dominante. De todas formas, la ratificación electoral de los presidentes o de las alianzas

⁷ La Iniciativa Yasuní-ITT fue un proyecto de Correa que condicionaba el mantenimiento de un sector del Parque Nacional Yasuní ubicado entre los cuadrantes de exploración petrolera Ishpingo, Tiputini y Tambococho. En adelante, la zona podrá ser explotada económicamente.

políticas en ejercicio da cuenta de que el malestar o la protesta de diversas fuerzas sociales, todavía apuesta a redefinir los términos de la acción estatal o la orientación de la política económica dentro de la alianza de dominio, al mismo tiempo que rechazan las ofertas políticas ancladas en experiencias de neoliberalismo ortodoxo de los tempranos noventa.

*¿Agotamiento del progresismo neoliberal en América Latina?*⁸

América Latina termina el 2014 con unos grados de incertidumbre social y política que, hasta hace poco, parecían esfumados en la confianza que llegaron a adquirir los gobiernos apostados en una línea de progresismo neoliberal, y el entusiasmo de ciertos anclajes sociales que los sostenían. Al agotamiento del ciclo “virtuoso” de ciertas materias primas de la región y los propios vaivenes de la economía internacional, se agrega la inestabilidad que registran las alianzas dominantes en cada uno de los países latinoamericanos, al punto que no permiten vaticinar, de forma nítida, el devenir de cada una de estas experiencias hasta hace poco celebradas en forma extendida.

Dado que ninguna solidez política efectiva desaparece de pronto y sin mayores razones, esta encrucijada abierta en el continente indica que los clivajes a partir de los cuales se ha entendido el proceso latinoamericano reciente deben ser revisados. Tanto los países abiertamente neoliberales, como aquellos más inclinados hacia un desarrollo capitalista nacional, de orientación más conservadora o progresista, de liderazgos más elitarios o populares, transitan por situaciones de inestabilidad o de crisis política abierta.

En las experiencias ortodoxas de neoliberalismo, pese al asomo de alertas de distinto grado, todavía la desarticulación social heredada de ciclos anteriores le permite a las alianzas dominantes seguir impulsando sus programas. Sin embargo, en la experiencia neoliberal más avanzada, a saber, la chilena, comienzan a madurar fuerzas sociales subalternas que relativizan la hegemonía de una alianza social que, durante cuatro décadas, avasalló de

⁸ Modonesi (2014) ha señalado que existe un agotamiento de la hegemonía progresista en América Latina, en tanto Ruiz (2015) señala, en una dirección similar, que se está produciendo un agotamiento del progresismo neoliberal.

forma incontestada al resto de la sociedad. En tanto, en los casos en que el impulso neoliberal fue parcialmente revertido, lo que domina la escena es una dificultad para sostener un capitalismo nacional en un contexto de estrechez económica, de inestabilidad internacional y de una recuperación parcial de las históricas oposiciones responsables de las crisis sociales y políticas de finales de los años ochenta e inicios de los noventa. En particular, la crisis venezolana ha llevado a que el gobierno cubano busque una inédita solución a su desesperada situación por fuera de América Latina. Mientras que, en las experiencias liberal-desarrollistas, se acentúa la liberalización económica y la penetración de capitales multinacionales, al mismo tiempo que se hace más visible una incapacidad del Estado por mantener y/o ampliar los mecanismos de redistribución social en que se había sostenido tal curso de cosas.

Ahora bien, resulta común en aquellos casos nacionales más expresivos de cada una de las variantes de neoliberalismo consideradas –como Chile, Argentina y Brasil, respectivamente–, una situación de crisis política en ascenso y la extrema dificultad para seguir conteniendo, ya sea por la vía de la desarticulación social o bien por la de una integración clientelar, a la protesta social. De momento, no aparecen indicios claros de que la crisis política abierta se resuelva, aunque, al mismo tiempo, hay que consignar el hecho de que la ciudadanía no se inclina (salvo en el caso de México y de algunos países de América Central) por alternativas políticas a las que actualmente gobiernan.

En definitiva, América Latina vuelve a entrar en un ciclo de incertidumbre política y social, marcada por el agotamiento de las alianzas encarnadas en las fórmulas del progresismo neoliberal, sin que aparezcan alternativas nítidas aún en el horizonte. Para seguir su curso, es preciso recuperar el proceso histórico inmediato a partir de las tensiones que generan las modalidades de inserción todavía dependientes –pese a los distintos ajustes y redefiniciones– en la escena capitalista mundial, de cada una de estas situaciones nacionales. Lejos de representar ello una homogenización mecánica, como se pretendió presentar en su momento bajo una “globalización” naturalizada, abre curso a marcadas diferencias. Las variaciones que comportan, respecto de tal situación común ante la escena mundial dominante, se especifican a partir de la

fisonomía que adoptan las alianzas dominantes y el conflicto entre las distintas fuerzas sociales por la orientación de la acción estatal. En consecuencia se manifiestan muy diferentes configuraciones estatales, como también dispares alineamientos sociales alrededor de los conflictos políticos más determinantes, en cada caso: una estructura social –de clases y grupos sociales– que resulta de distinto modo articulada en las alianzas dominantes y sus respectivas exclusiones.

Referencias bibliográficas

- Ananibar, Antonio y Benjamín Rodríguez (2013). *América Latina, ¿del Neoliberalismo al Neodesarrollismo?*. Buenos Aires: PNUD y Siglo XXI Editores.
- Badaró, Marcelo (2014). “As lutas da classe trabalhadora no Brasil dos 'mega-eventos’”. En *OSAL* (35), pp. 215-225.
- Boccardo, Giorgio (2014). *Neoliberalismo avanzado en América Latina. Los casos de Colombia, México y Perú*. Santiago: Tesis para optar al grado de Magíster en Estudios Latinoamericanos en Universidad de Chile.
- Bottaro, Lorena y Marian Sola (2014). “La promoción del modelo minero en contextos subnacionales. Un recorrido analítico por las provincias de La Rioja y San Juan, Argentina”. En *OSAL* (35), pp. 241-261.
- Burki, Shaid Javed y Guillermo Perry (1998a). *Más allá del Consenso de Washington. La hora de la reforma institucional*. Washington: Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento-Banco Mundial.
- Burki, Shaid Javed y Guillermo Perry (1998b). *La larga marcha: una agenda de reformas para la próxima década en América Latina y el Caribe*. Washington: Banco Mundial.
- Cepal (2014). *Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe*. Santiago: Cepal.
- Modonesi, Massimo (2014). “Conflictividad socio-política e inicio del fin de la hegemonía progresista en América Latina”. En Pastor, Jaime y Rojas Pedemonte, Nicolás (coordinadores). *Anuario del conflicto social 2013*. Barcelona: Universidad de Barcelona.

- Modonesi, Massimo (2013). "Revoluciones pasivas en América Latina. Una aproximación gramsciana a la caracterización de los gobiernos progresistas de inicio de siglo". En Modonesi, Massimo (coordinador). *Horizontes gramscianos. Estudios en torno al pensamiento de Antonio Gramsci*. México D.F.: FCPyS-UNAM.
- Osorio, Ana, Juan Franco, Sebastián Pérez y Jaime Nieto (2014). "El ciclo de protestas sociales en Colombia y la movilización agraria". En *OSAL* (35), pp. 227-239.
- Ruiz, Carlos (2015). "Progresismo neoliberal, democracia y refundación capitalista en América Latina". En *Revista Estudios Latinoamericanos del CELA* (en prensa).
- Ruiz, Carlos (2013). *Estructura Social, Estado y Modelos de Desarrollo en América Latina Hoy. Elementos para una interpretación sociológica de la transformación reciente*. Santiago: Tesis para optar al grado de Doctor en Estudios Latinoamericanos en Universidad de Chile.
- Ruiz, Carlos y Giorgio Boccardo (2014). *Chilenos bajo el neoliberalismo. Clases y conflicto social*. Santiago: El Desconcierto.
- Stolowicz, Beatriz (2009). "El debate actual: posliberalismo o anticapitalismo". En Estrada Álvarez, Jairo (compilador). *Crisis capitalista. Economía, política y movimiento*. Bogotá: Espacio Crítico Ediciones.